

PLENO DE LA CÁMARA



Núm. 66

VIII Legislatura

Año 2009

Presidencia: Excma. Sra. Dña. Fuensanta Coves Botella

Sesión plenaria número 37
celebrada el miércoles, 9 de diciembre de 2009

ORDEN DEL DÍA

CONSEJOS GENERALES DE ASAMBLEAS DE CAJAS DE AHORROS

8-09/CGAC-000004. Designación de Consejeros Generales de la Asamblea General de la Caja General de Ahorros de Granada.

COMPARECENCIAS

Debate agrupado de:

- 8-09/APP-000259. Comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Economía y Hacienda, a petición propia, a fin de informar sobre el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía.
- 8-09/APP-000260. Comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Economía y Hacienda, a fin de informar sobre el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. Antonia Jesús Moro Cárdeno, D. Rafael Velasco Sierra, D. Antonio Núñez Roldán, Dña. María del Pilar Navarro Rodríguez, D. Ángel Javier Gallego Morales, D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José García Giralte, Dña. Verónica Pérez Fernández y D. Fernando Manuel Martínez Vidal, del G.P. Socialista.
- 8-09/APP-000263. Comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Economía y Hacienda, a fin de hacer una valoración del VII Acuerdo de Concertación Social en Andalucía, presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.

Yo creo que lo que hay es que contribuir a solucionar los problemas que tiene la agricultura, que, evidentemente, yo reconozco —y en eso estamos trabajando—. La forma que entendemos desde el Gobierno socialista es con la interlocución, no con hacer estudios, sino la interlocución con las organizaciones agrarias: nos parece fundamental, en esas mesas o en otros ámbitos de trabajo. No son fáciles las soluciones, se lo puedo asegurar —no es fácil—; pero esto es un sector económico, la agricultura, que tiene futuro. Pero tienen que entender, los primeros los agricultores, que tienen que ser profesionales, y que tienen que tener una agricultura competitiva, y para eso va a estar la Consejería de Agricultura apoyándolos en todos y cada uno, y no para irresponsabilidades.

Por la buena imagen de la agricultura andaluza tenemos que velar todos, no solo el Gobierno de Andalucía: todos los que estamos y somos responsables en esta Cámara y fuera de ella.

Muchas gracias.

[Aplausos.]

8-09/APP-000267. Comparecencia de la Excm. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, a fin de informar sobre la política del Gobierno andaluz en materia de Memoria histórica

La señora COVES BOTELLA, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Muchas gracias, señora Consejera de Agricultura y Pesca.

Señorías, y para finalizar el punto segundo del orden del día, comparecencia de la excelentísima señora Consejera de Justicia y Administración Pública a fin de informar sobre la política del Gobierno andaluz en materia de Memoria histórica; comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.

Para comenzar la comparecencia, tiene la palabra, en nombre del Consejo de Gobierno, la Consejera de Justicia y Administración Pública.

Señora Consejera, su señoría puede comenzar.

La señora ÁLVAREZ CIVANTOS, CONSEJERA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

—Gracias, señora Presidenta. Señorías.

Comparezco ante el Pleno de esta Cámara, a petición del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, para informar

sobre la política del Gobierno andaluz en materia de Memoria histórica.

Quiero comenzar planteando un objetivo que resume cuál es el compromiso del Gobierno andaluz y el eje de las políticas del Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica: transformar la memoria individual en colectiva, transformar la memoria de las personas concretas en la memoria de un pueblo, el nuestro; unas políticas que no tienen otro objetivo que reconocer, restituir, proteger, cuantificar, divulgar y difundir, señorías. Y, aunque en ocasiones utilicemos la expresión «dignificar», partimos de la consideración de que estas personas nunca perdieron su dignidad. Fueron derrotadas, pero no vencidas.

La Junta de Andalucía viene trabajando en la recuperación de la Memoria histórica con valentía y decisión desde el año 2001, teniendo siempre como pilares dos conceptos esenciales: el reconocimiento y la reparación personal para las víctimas y sus familias. Para ello hemos desarrollado un conjunto de normas, que, además de ser pioneras en el conjunto del Estado español, constituyen el marco normativo en el que se desarrollan las actividades que emprendemos y sientan las bases para que otras comunidades autónomas desarrollen sus propias normas. Estas medidas han sido, en cuanto a las indemnizaciones a personas que sufrieron privación de libertad, el Decreto 1/2001, de 9 de enero, en el que se establecen indemnizaciones a ex presos y represaliados políticos que sufrieron privación de libertad por más de tres años y por el que se acordó abrir convocatoria pública para aquellos otros que sufrieron privación de libertad por menos de tres años, ambos como consecuencia de los supuestos previstos en la Ley de Amnistía de 1977. Posteriormente, el Decreto 333/2003, de 2 de diciembre, reguló las indemnizaciones a ex presos y represaliados políticos que sufrieron privación de libertad por un periodo superior a tres meses e inferior a tres años. Finalmente, el Decreto 35/2006, de 21 de febrero, aún vigente, que tiene por objeto establecer el procedimiento para otorgar una indemnización económica única a las personas ex encarceladas y represaliadas políticamente que sufrieron privación de libertad por un periodo superior a tres meses en establecimientos penitenciarios, disciplinarios o campos de concentración, consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, y que no se acogieron a los decretos precedentes.

El marco general en el que estamos trabajando es el Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de las actuaciones entorno a la recuperación de la Memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española y la Posguerra. Este decreto marca otro momento decisivo en el progreso de las políticas de la Memoria. Ha permitido que desde el año 2004 nuestra Comunidad Autónoma tenga una

orden de subvenciones propia dirigida a las entidades sin ánimo de lucro, ayuntamientos y universidades. Sobre la base de este decreto, el Gobierno andaluz también creó la figura del Comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, mediante el Decreto 54/2005, de 22 de febrero, para el desarrollo de las competencias relacionadas con la recuperación de la Memoria histórica en nuestra Comunidad.

Posteriormente, el Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de abril, atribuyó a la Consejería de Justicia y Administración Pública las competencias asignadas al Comisario y centralizó todas las políticas de Memoria histórica; hecho que ha permitido integrar todas las políticas de la Junta de Andalucía en relación con este tema. De este modo, la unificación de las políticas de Memoria ha supuesto una mejora en agilidad y en eficacia de los trámites y de la gestión; hecho que han agradecido los familiares, las asociaciones, los ayuntamientos, con los que estamos trabajando hace años.

Por último, el pasado 30 de junio fue aprobado el Decreto 289/2009, que venía a modificar el Decreto 54/2005 y que transforma la figura unipersonal del Comisario en una unidad administrativa: el Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Señorías, otro hito fundamental que ha permitido dar un paso más en las políticas de Memoria ha sido la publicación, en el *Boletín Oficial de la Junta de Andalucía*, con fecha 28 de septiembre de 2009, del protocolo andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra, por el que se regula el procedimiento de exhumación y el protocolo por el que deberán regirse todas las actuaciones en relación con las fosas comunes de la Guerra Civil y del franquismo.

Señorías, he repasado, en primer lugar, el marco normativo más cercano, el de la Comunidad Autónoma; pero saben que fue la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de Memoria Histórica, la que sentó las bases para que los poderes públicos llevaran a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática, por la que se reconocen, además, y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. Esta norma parte de la consideración de que los diversos aspectos relacionados con la memoria personal y familiar, especialmente cuando se han visto afectados por conflictos de carácter público, forman parte del estatuto jurídico de la ciudadanía democrática. Fue una ley de consenso, aprobada por el Parlamento de España el 27 de diciembre de 2007, y a la que únicamente se opusieron con el voto en contra el Partido Popular y Esquerra Republicana; una ley que ha afrontado con valentía todos los ámbitos de la Memoria histórica.

Pues bien, señorías, con este paraguas normativo, en la tarea de llevar a cabo una política de memoria seria y rigurosa, hay dos máximas imprescindibles: la

colaboración y la investigación científica. La colaboración, porque el trabajo de recuperar nuestra memoria es algo que no estamos haciendo solos, debe ser colectivo —no sería de justicia hacerlo solos—. Estamos haciéndolo con las asociaciones, los ayuntamientos, las diputaciones, las universidades, los sindicatos, el Gobierno de España y con otras comunidades autónomas. Y la investigación científica, porque es la que nos permite trabajar con argumentos sólidos, veraces, basados en trabajos historiográficos y avalados por las universidades andaluzas. Por tanto, estamos trabajando todos, codo con codo, participando juntos, como juntos soñaron nuestro futuro los hombres y mujeres a quienes queremos rendir homenaje, y con el rigor y la seriedad científica que nos exigimos como Administración responsable y para con los familiares de las víctimas. Con esta máxima estamos trabajando en un tema fundamental como son las exhumaciones de las fosas comunes de la Guerra Civil y del franquismo. La Junta de Andalucía ha asumido la responsabilidad de colaborar en la búsqueda, localización y exhumación de fosas comunes en nuestra Comunidad. Eso sí, lo estamos haciendo con el rigor científico que un tema tan delicado requiere. Y, para ello, como antes mencionaba, hemos puesto en marcha el Protocolo Andaluz de Exhumaciones al cual hicimos referencia detallada en la comparecencia del pasado 29 de octubre en Comisión. El protocolo está siendo ya la hoja de ruta administrativa que regula el procedimiento de actuación por el que deben regirse las exhumaciones en las que participe directamente el Gobierno andaluz. La primera actuación en la que hemos aplicado el protocolo y hemos verificado, a pesar de todo, el acierto de su aprobación, es la exhumación de las fosas de Alfacar, en Granada, donde estamos trabajando con la premisa que antes les comentaba: colaboración, rigor científico y respeto a la intimidad de los familiares. La Orden de 7 de septiembre de 2009 por la que se aprueba el Protocolo Andaluz de Exhumaciones ha previsto una cláusula de confidencialidad que se está aplicando en todo el proceso. La Junta de Andalucía respeta los derechos de todos los familiares, y representa tanto a quienes quieren identificar a sus familiares como a los que no. Por ello, con la actuación en la fosa de Alfacar, se han conciliado los intereses de familias que llevaban años luchando por localizar a sus familiares con los de las familias que no querían la identificación. En esto consiste la política de la Memoria histórica: en la conciliación y el encuentro de todos los andaluces.

Pero no solo estamos trabajando en Alfacar, sino que también llevamos colaborando años, dos años, en la exhumación de la fosa de La Puebla de Cazalla en Sevilla, junto a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y Justicia y el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla. A día de hoy se han exhumado más de cincuenta cadáveres de hombres y mujeres asesinados por el ejército franquista en varios pueblos

de la Sierra Sur de Sevilla y que se encuentran en dicha fosa.

Siguiendo con la política de exhumaciones, es imprescindible detenerse en la fosa del cementerio de San Rafael, en Málaga. La excavación de la conocida como fosa de Málaga ha sido posible por la firma de un convenio entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, la Asociación contra el Silencio y el Olvido de Málaga, el Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España y además cuenta con la colaboración de la Universidad de Málaga. Acaban de finalizar los trabajos y los resultados son reveladores: 2.840 cuerpos exhumados en la fosa común más grande de Europa occidental. Una fosa donde han aparecido restos de hombres, mujeres y niños víctimas de la represión franquista. A partir del año 2010, comenzaremos los trabajos de la fosa común de El Marrufo, en Jerez de la Frontera, en colaboración con la Diputación de Cádiz, para lo cual ya estamos negociando un convenio. También en Almería estamos en conversaciones con los familiares y las diferentes administraciones interesadas en la localización del cadáver del último alcalde republicano de Cuevas de Almanzora en la provincia de Almería.

Siguiendo con el repaso a la política de exhumaciones, tengo que detenerme en la fosa localizada en el municipio de Gerena, en Sevilla. Allí, señorías, en donde se cree que están enterradas alrededor de diecinueve mujeres naturales de Guillena asesinadas por el ejército de Franco en julio de 1936. También es importante señalar que se sigue trabajando con los ayuntamientos para identificar los lugares de memoria. En este sentido, hay que decir que más de ciento treinta ayuntamientos andaluces han construido monumentos de memoria en sus municipios.

También estamos trabajando en la divulgación de las diferentes fosas que se encuentran localizadas en el barranco del Carrizal, en el pueblo granadino de Órgiva, un ejemplo de la crueldad de la Guerra Civil y un símbolo de lo brutal de la represión franquista.

Señores y señoras diputados, con objeto de lograr, en la medida de lo posible, dotar de rigor científico las actuaciones que incluyan exhumaciones, se ha establecido como requisito vinculante antes de autorizar la actividad, la presentación de una memoria que avale esta intervención. Dada la complejidad y costes de su elaboración, se ha arbitrado una nueva línea de subvenciones en la convocatoria 2010 que facilite su financiación a las entidades tanto locales como sin ánimo de lucro e incluso a descendientes directos.

Pero, además de las exhumaciones, seguimos trabajando en otras actuaciones no menos importantes a las que voy a referirme brevemente. El Banco Audiovisual de la Memoria Histórica y Social de Andalucía, que pretende dar cabida al conjunto de documentos gráficos, sonoros y audiovisuales de los hombres y mujeres, de familiares asesinados y represaliados

por el franquismo. Los protagonistas —sindicalistas, dirigentes políticos en la clandestinidad, familiares, etcétera— nos hablan de sus experiencias en más de cien entrevistas. Este banco audiovisual es una fuente para la investigación y el conocimiento de Andalucía, principalmente, desde la perspectiva de la represión que se padeció en nuestra tierra.

La información de los protagonistas contenida en este archivo permitirá también un acercamiento al conocimiento a través del método de otras ciencias sociales—sociología, antropología, lingüística, psicología social, etcétera—. A día de hoy, pretendemos que los extractos más interesantes de estas entrevistas puedan estar disponibles para su consulta en la página web de Todos los Nombres.

Respecto al proyecto del mapa de fosas, decirles que tan pronto recibamos el informe final, que está elaborando el coordinador de las nueve universidades andaluzas, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico comenzará los trabajos de compilación cartográfica del mapa de fosas de Andalucía, así como la elaboración de un producto de difusión a partir de la documentación elaborada por las asociaciones provinciales para la recuperación de la memoria.

El estudio de los tribunales de responsabilidades políticas en Andalucía es un proyecto en el que están trabajando las nueve universidades andaluzas mediante sus departamentos de Historia Contemporánea. La investigación se centra en el estudio de la represión económica y administrativa del franquismo a través de las comisiones de incautación de bienes y la jurisdicción especial de los tribunales de responsabilidades políticas entre 1936 y 1945. Los treinta y cinco investigadores andaluces están estudiando más de sesenta mil expedientes individuales y colectivos para volcarlos posteriormente en una base de datos única para toda Andalucía. La base de datos se va a convertir en un referente nacional sobre la Memoria histórica, se está procesando mucha información que recoge desde los fallos de los consejos de guerra y de la represión contra la masonería, los informes de párrocos, alcaldes, de la Guardia Civil, de Falange, de confidentes. En suma, está saliendo a la luz el botín de guerra, los datos de una represión que se inició durante los años de la Guerra Civil con la incautación de los bienes de las personas vinculadas a los partidos del Frente Popular o a los dirigentes sindicales y que se consolidó después con la ley de 9 de febrero de 1939 sobre responsabilidades políticas.

Señorías, estamos ante una investigación que, además de su interés científico, responde a una demanda manifestada por un amplio sector de la sociedad andaluza que, al igual que en otras partes de España, reclama saber qué ocurrió durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra con sus antepasados y sus familiares.

Por otro lado, desde el año 2006, se viene desarrollando un convenio entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Defensa, mediante una subvención para la selección y contratación del personal destinado a la ordenación e informatización de los datos del Archivo Militar Territorial Segundo. Actualmente están trabajando en dicho archivo tres personas contratadas por la Junta de Andalucía —un administrativo y dos técnicas de archivo— que ya han informatizado más de noventa mil fichas de represaliados, constituyendo una base de datos imprescindible para investigadores e historiadores no solo andaluces sino de todo el mundo. Tras la finalización de esos trabajos queremos avanzar y daremos un paso más firmando un nuevo convenio que contemple la digitalización de una parte importante de la información contenida en dichos fondos. La digitalización de las causas, sumarios, fichas policiales, etcétera, va a permitir un mejor acceso a las consultas de los investigadores y una mayor fluidez a la hora de recibir información por parte de los familiares de los represaliados de la Guerra Civil y el franquismo.

En relación con la política de subvenciones, quiero señalar que desde el año 2001 se han concedido indemnizaciones a 2.469 personas que sufrieron privación de libertad durante el franquismo. Gracias a la orden de subvenciones, que hemos conseguido una mayor implicación de la sociedad civil.

Mediante nuestra colaboración con las asociaciones, hemos apoyado a los ayuntamientos en su esfuerzo por realizar estudios, por construir monumentos de memoria y en la celebración de seminarios y congresos sobre Memoria histórica.

Hemos colaborado, también, con las universidades en su esfuerzo por realizar importantes estudios y por abrir nuevas líneas de investigación en relación con la Guerra Civil y la represión.

Y, en definitiva, nos hemos dotado de una herramienta única, que funciona desde el año 2004 y que ha sentado las bases para que otras comunidades autónomas y el propio Estado español adopten nuestro modelo.

También este año hemos firmado un modelo con el Centro de Estudios Andaluces, mediante una encomienda de gestión para actividades divulgativas, publicaciones, etcétera.

En resumen, venimos trabajando, desde hace años, en diferentes aspectos que tienen que ver con la colaboración, el estudio, la difusión, etcétera. Pero queremos dar un paso más y, por eso, para el año 2010, nos hemos planteado nuevos retos.

Testimoniar el reconocimiento institucional de todos los agentes sociales, Administraciones públicas, investigadores, es otro de los aspectos que, desde el Gobierno andaluz, vamos a impulsar.

Así, para el próximo año, se ha creado la primera convocatoria del Premio Andalucía de Memoria histórica, con la finalidad de otorgar público testimonio de reconocimiento a las personas físicas o jurídicas,

públicas o privadas, que hayan contribuido, de forma notoria, al estudio y a la investigación encaminadas al reconocimiento social, a restablecer el honor y la reparación moral de los daños causados a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, así como a la difusión de los principios éticos, culturales y políticos de quienes fueron privados de su vida o libertad personal por la defensa de los valores democráticos.

En dichos premios se reconocerá la contribución a la recuperación de la Memoria histórica en nuestra Comunidad Autónoma, en las categorías de ciudadanía, investigación, política municipal, agentes sociales de la memoria y educación en valores.

En 2011 se cumplirán 75 años del golpe de Estado del 18 de julio. Ya estamos trabajando en la preparación de una gran exposición sobre la Guerra Civil, para lo cual estamos colaborando con varias asociaciones de expertos.

Tenemos la intención de firmar un nuevo convenio con la Asociación de la Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, para seguir colaborando en la web Todos los Nombres, una página de referencia, con información sobre las identidades de los desaparecidos y represaliados de la Guerra Civil y la dictadura, haciéndola...

La señora COVES BOTELLA, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Señora Consejera de Justicia y Administración Pública, ruego a su señoría que vaya concluyendo. Gracias.

La señora ÁLVAREZ CIVANTOS, CONSEJERA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

—... haciéndola accesible para todos los que trabajamos para la recuperación de la Memoria histórica en Andalucía.

Realizaremos una presentación pública del informe final de la Fosa de San Rafael, en Málaga. También estamos preparando, para la próxima primavera, un trascendental seminario organizado entre la Junta de Andalucía y la Universidad Internacional de Andalucía sobre Memoria histórica. La semana pasada, en Canal Sur, se comenzó la emisión de una serie donde ha participado la Consejería de Justicia y Administración Pública, titulada *Los caminos de la memoria*, de 13 capítulos.

Para finalizar, señorías, no estamos haciendo otra cosa que lo que es nuestro deber como responsables públicos: cumplir la ley y recuperar nuestra memoria. Sin revanchismos, con la conciencia de que el estudio científico nos permitirá asumir nuestro pasado sin lagunas interesadas, porque esa memoria es el cimiento

principal sobre el que se construye el futuro de nuestra democracia.

Lo decía, no hace mucho, en Granada: hay razones para recuperar la memoria de la historia, porque la historia de Andalucía, tierra de luz, arroja sombras que queremos que desaparezcan. La memoria hay que ejercitarla. Si no se recuerda, corre el peligro de repetir sus peores pasajes.

Muchas gracias.

[Aplausos.]

La señora COVES BOTELLA, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Muchas gracias, señora Consejera de Justicia y Administración Pública.

Corresponde ahora el turno de intervenciones al Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, al diputado señor Mariscal Cifuentes.

Señor Mariscal, su señoría tiene la palabra.

El señor MARISCAL CIFUENTES

—Gracias, señora Presidenta.

Señora Consejera, desde nuestro grupo le agradecemos enormemente el esfuerzo que ha realizado para poder trasladarnos, de forma sintética, las líneas de trabajo de su Consejería en materia de memoria.

Desde nuestro grupo aplaudimos muchas de las cuestiones que usted nos ha puesto hoy aquí y le vamos a pedir que se mejoren y que se sigan realizando esfuerzos en línea con muchas de las cosas que ha dicho.

Y también es responsabilidad de nuestro grupo llamar la atención sobre aquellas cuestiones que me parece..., que nos parece que son erróneas en la gestión de la Memoria histórica, por parte de su Gobierno, así como sin ningún tipo de complejos dar ideas; ideas que no solamente han surgido de nosotros mismos, sino ideas que surgieron, en su momento, de su mismo Gobierno, en esta misma legislatura, y que nos gustaría conocer cuál es la disposición de su consejería para dar continuidad a ellas mismas.

Creemos..., y permítame empezar mi única intervención, la única intervención que vamos a tener en esta comparecencia, señalando una serie de cosas que me parece que es fundamental subrayar y que tienen que ver con la Memoria histórica. Porque la Memoria histórica no consiste solamente en reparar —y usted ha empezado muy bien diciéndolo— la memoria individual de cada una de las víctimas o de los familiares de la dictadura franquista y de la Guerra Civil.

Quisiéramos señalar cinco puntos, seis puntos:

En primer lugar, la II República española no fue, desde su inicio, un régimen fallido o imposible, abocado finalmente a un desenlace trágico.

En segundo lugar, la Guerra Civil fue el producto de un intento de golpe de Estado que falló, como tal, por la imprevista resistencia popular en defensa de la República.

En tercer lugar, la única responsabilidad histórica de tal estallido recae sobre los conspiradores militares y civiles que la propiciaron ya desde los primeros días de la República.

En cuarto lugar, la dictadura franquista fue un régimen que nació de la violencia y pervivió gracias a la violencia durante décadas, convirtiéndose en una de las dictaduras más sangrientas del planeta a lo largo del siglo xx.

En quinto lugar, muchas de estas víctimas de esta violencia aún siguen enterradas sin nombre, en baldíos, en cunetas, en tumbas anónimas y colectivas en cementerios.

Y en sexto y último lugar, existió una resistencia social y popular a la dictadura, fuertemente reprimida durante décadas, que contribuyó decisivamente al debilitamiento del régimen y el advenimiento de la democracia.

Estoy convencido, señora Consejera, de que usted comparte conmigo todos y cada uno de los puntos que acabo de decir, porque todo lo que acabo de decir está fundamentado científicamente y todo lo que acabo de decir es el objeto diario de los revisionistas históricos, que procuran socavar todas y cada una de las afirmaciones que acabo de hacer.

Y creo que uno de los objetivos de su Consejería y de su Gobierno es combatir ese revisionismo, combatir ese revisionismo, propiciando, como usted muy bien ha dicho, que la investigación y los profesionales de la historia puedan seguir enseñándonos cuál ha sido la verdad, porque no hay justicia y no hay memoria sin verdad, sin la defensa, la divulgación de estas afirmaciones históricas que, como digo, son ampliamente refrendadas hoy día por la investigación historiográfica y por la fuerza de los hechos, pero que son sistemáticamente negadas y tergiversadas por el poder franquista y, en parte, por el propio poder democrático, y que constituyen el meollo y la esencia de la lucha por la recuperación de la Memoria histórica y, por tanto, del trabajo de numerosas organizaciones sociales de defensa de la Memoria.

Y, en este sentido, la exhumación de víctimas y de desaparecidos, el apoyo y el asesoramiento a familiares y allegados, la exigencia a los poderes públicos para que, de una vez, asuman y ejerzan la responsabilidad democrática de dignificar a las víctimas y condenar, siquiera moralmente, a los verdugos tienen siempre un doble y entrelazado objetivo, señorías. Se trata, claro está, de ajustar cuentas con la mentira y con la ocultación del pasado, mostrando al pueblo español, ¿por

qué no?, los rostros y los nombres de los asesinados, entregando honradamente sus restos a los familiares y a los descendientes, y enarbolando la dignidad que nunca perdieron, pero que se les negó, primero, desde el poder franquista y, después, desde la monarquía constitucional.

Nosotros compartimos, señora Consejera, el afán integrador y unificador que, a través de la Comisaría de la Memoria Histórica se puso en marcha en su momento, y que ha tenido su más reciente capítulo en los ya nombrados, de nombrar no ya un comisario, sino un comisariado, para poder facilitar los trámites en la gestión. Y nosotros vamos a estar detrás de Gobierno siempre que se contribuya a facilitar los trámites, y a apoyar trámites, y a asesorar a las personas que pueden ser, que fueron víctimas, o sus familiares.

Usted también lo ha dicho: La política inicial de la Junta fue pionera en su momento con las ayudas a represaliados y a los ex presos, y también ahí hubo déficits serios. La sede de mi partido, del Partido Comunista en Córdoba, por ejemplo, se llenó entonces de abuelos y de abuelas que iban a solicitar ayuda para poder rellenar formularios, para poder conocer plazos, para hacer cosas que nosotros creemos que es responsabilidad de la Administración realizar, y que hay que liberar recursos para que en la Administración se les pueda prestar permanentemente una ayuda a estas personas para que puedan cumplir con los trámites precisos. Gracias a organizaciones civiles con cientos de jóvenes voluntarios, también en aquel entonces se pudieron sustanciar muchas de esas ayudas.

Y es que hay que hablar del papel del Estado; un papel del Estado que en muchas ocasiones está siendo ocupado, ese hueco, por organizaciones sociales, organizaciones civiles que están realizando exhumaciones, están realizando investigaciones, y nuestro objetivo como organización política sería que todas y cada una de esas tareas fueras asumidas por el Estado a cargo del Erario público.

A mí me genera cierta incertidumbre, señora Consejera, que no haya nombrado algunas de las líneas que la Consejera de Justicia anterior a usted realizó y puso en pie al principio de esta legislatura, y me llama mucho la atención que no haya hablado de una de las mejores ideas que entonces escuchamos, y que nos gustaría que su Gobierno retomase, de verdad, y es un plan estratégico para la recuperación de la Memoria histórica; un plan en el que se puedan poner todas y cada una de las líneas que usted ha nombrado, de forma planificada, de forma plurianual; donde aparezcan una serie de líneas y de medidas con consignación presupuestaria que permitan, a su vez, evaluar, por parte de la ciudadanía, por parte de sus representantes y por parte de las organizaciones sociales, la política en materia de recuperación de la Memoria histórica.

En esa misma línea se ha hablado de una comisión técnica de expertos, que yo sepa, que no se ha puesto

en marcha, o de un Consejo Andaluz de la Memoria Histórica. Si se ha puesto en marcha, pues me corrige: yo me equivoco y punto. Me alegro de que se haya puesto en marcha. Me gustaría que en su réplica me informara cuándo y cuál está siendo su funcionamiento. O el Consejo Andaluz de la Memoria Histórica, o el Centro para la Investigación y Documentación de la Memoria Histórica, que la Consejera entonces afirmaba que iba a tener su sede en el palacio de La Gavidia. Qué mejor sitio para tener este centro para la investigación y la documentación de la Memoria histórica.

Algo ha comentado usted del mapa de fosas en convenio con las universidades, pero no ha comentado nada de aquellos mandatos que la Ley 52/2007, comúnmente conocida —me van a ahorrar decir el nombre completo, que es un poco enrevesado—, comúnmente conocida como «Ley de la Memoria Histórica», mandaba a las administraciones autonómicas, en colaboración con las administraciones locales, de la elaboración de un catálogo de edificios e infraestructuras públicas que fueron construidas por la brigadas de trabajadores forzosos —artículo 17 de tal ley—. O el artículo 15 de la misma ley: elaboración de catálogos de vestigios relativos a la Guerra Civil y a la Dictadura. Este tipo de asuntos, que además fue incluido también en una proposición no de ley en Pleno, que fue aprobada el 25 de octubre del año 2007 por parte del Grupo Socialista y por parte del Grupo de Izquierda Unida, en la cual se mandaba al Gobierno a realizar algunas cuestiones que tienen que ver con la Memoria histórica en Andalucía. Porque este Parlamento le pidió al Gobierno andaluz iniciar los trámites para anular la sentencia dictada contra Blas Infante, y también me gustaría que usted, en nombre del Consejo de Gobierno, me diga cómo van esas gestiones y cómo piensa afrontarlas.

Y también, desde nuestro grupo —y tiene que ver con la Memoria histórica y con la memoria democrática—, la dignificación de la memoria de García Caparrós, el que se le pueda dar, como hemos venido pidiendo, la Medalla de Andalucía a título póstumo, y que pueda ser reconocida su familia como víctima del terrorismo, con todo lo que ello puede conllevar.

También aparecía, en aquella proposición no de ley, el apoyo al proyecto Todos los Nombres, y usted lo ha nombrado, y usted sabe perfectamente que el proyecto Todos los Nombres lleva huérfano unos mesecitos y que está necesitado de ayuda; que el Ministerio de la Presidencia está boicoteando este proyecto y que me consta que están intentando obtener el apoyo necesario, por parte de su Gobierno, para poder mantener el magnífico trabajo que yo aquí quiero reconocer y que usted también ha nombrado. Pero, claro, estas cosas, para poder poner, de forma desinteresada, 51.557 fichas con nombre de represaliados, 390 microbiografías, 348 documentos, 84 investigaciones, contar con 270 colaboradores y hacer posible un trabajo muy importante, y fue la entrega al juez Garzón, ahora puesto en tela

de juicio por la extrema derecha realmente existente en este país por el trabajo que realizó —que manda narices que eso todavía pueda suceder en este país—; la entrega, como digo, al juez Garzón de 22.400 nombres de asesinados y de fusilados.

Creo que en ese plan se deberían también incluir aspectos relacionados con los planes de estudio y de los libros de texto, con el tratamiento didáctico de la II República como referente de una cultura democrática en Andalucía. Eso también es hacer memoria.

También queremos llamar la atención sobre el hecho de que, a pesar de que el Banco Audiovisual de la Memoria Histórica Social de Andalucía, que usted ha nombrado, creemos que debe seguir funcionando, sin embargo, no nos parece que los 50.000 euros de dotación presupuestaria para este año sean suficientes, ni que sean suficientes aún los 58.000 euros que se han consignado presupuestariamente para los monolitos para la recuperación de la Memoria histórica. Nos parece que este dinero es absolutamente escaso.

Y también ha hecho usted referencia a la cuestión relacionada con el archivo del tribunal militar territorial segundo de Sevilla, y ya fue ocasión de una pregunta de un servidor a la señora Consejera —pregunta con la que, por cierto, se estrenó la Consejera en este pleno. Qué mejor estreno, ¿no cree?—, pero que nos sigue preocupando —nos sigue preocupando que los investigadores tengan trabas para poder investigar en este tribunal—, y que hay que acelerar, hay que acelerar de forma notable los trabajos de digitalización, y cuándo se van a terminar esos trabajos, cuándo se van a poner a disposición de los investigadores, porque es que siguen sin contar los investigadores ni siquiera con una máquina de reprografía, siguen sin contar con una máquina de reprografía. A lo mejor se podría apoyar, mientras tanto, a los investigadores. Podríamos sacar un poquito de presupuesto y comprarle una fotocopidora al pobre Ministerio de Defensa, que no debe tener recursos suficientes para comprar una fotocopidora y ponerla en el archivo del tribunal militar territorial. O decirle que se pueden sacar más de cuatro o cinco expedientes al día, porque, para consultar cincuenta expedientes, resulta que se necesitan diez días. Y esto no me lo he inventado yo, evidentemente, señora Consejera.

Una penúltima cosa: Ya le anuncio que, en el próximo periodo de sesiones, nuestro grupo presentará la solicitud de la creación de un grupo de trabajo en materia de Memoria histórica, porque creemos que es conveniente que vayamos, después de ese grupo de trabajo, a la aprobación de un proyecto de ley en materia de Memoria histórica para Andalucía, o que al menos tengamos ocasión, en ese grupo de trabajo, de escuchar a todos y cada uno de los agentes sociales, de las organizaciones sociales, a los investigadores y a las investigadoras que están realizando la tarea desde hace mucho tiempo de recuperación de la Memoria

histórica, y que tienen una serie de necesidades y de reivindicaciones que creo que tenemos que escuchar. Yo estoy trayendo aquí algunas de ellas, y creemos que podría ser interesante tal cosa, y nos gustaría que usted, como Consejera, invitara al grupo parlamentario que sostiene a su Gobierno a que accediera a la creación de ese grupo de trabajo.

Quería referirme también a la posibilidad de apoyo a la campaña sobre la modificación de la inscripción en los registros civiles para todas las víctimas del franquismo, que es también una iniciativa que ha realizado una serie de organizaciones sociales relacionadas con la Memoria, y que se deje de pedir lo de los dos testigos presenciales para poder inscribir a las personas. Por ejemplo, de los cerca de cuatro mil fusilados en las fosas de Sevilla capital —como usted bien sabe—, no llegan a mil los inscritos en el Registro Civil. Y eso es algo que requeriría de un posicionamiento del Gobierno andaluz y que, mientras no se solucione, pues, va en detrimento de la justicia y de la verdad.

Y me he dejado para el final la polémica en torno al protocolo de exhumación, y le vamos a decir, pues, cuál es nuestra posición —que yo creo que ya sabrá cuál es—. Porque el 21 de noviembre se realizaron una serie de movilizaciones en Sevilla que nosotros, como organización política, respaldamos, y qué mejor momento que esta comparecencia para poner de manifiesto nuestro deseo de que la Consejería retire tal reglamento de exhumaciones para poder hacer valer algo muy importante —y a lo cual se ha referido usted—, y es la responsabilidad del Estado democrático de derecho. Y es que las fosas tienen que ser levantadas conforme a la legislación internacional en materia de Derechos Humanos, y que deben ser los jueces de instrucción los que acuerden las medidas oportunas para ese levantamiento —algo que no figura en el texto legal que ustedes han aprobado—, porque de eso depende la investigación legal de los delitos que cometieron las personas que ejecutaron, directa o indirectamente, a los allí inhumados.

Cuando el levantamiento de una fosa se hace sin el visto bueno de los jueces de instrucción, se pueden ocasionar destrucciones de pruebas y, por lo tanto, la desaparición o la prescripción de los delitos cometidos —es decir, carecerían de validez con la participación de personas ajenas a la justicia—, o los aspectos de confidencialidad que aparecen en tal texto y que creemos que no hacen ningún favor a la lucha contra la impunidad en nuestro país, porque, de alguna forma, niega el derecho de toda la sociedad a conocer y a valorar, en toda su magnitud, los hechos acaecidos.

Esos son los dos elementos fundamentales de oposición a tal texto legal. Nos gustaría que escuchase las reivindicaciones que se están haciendo desde el Movimiento para la Recuperación de la Memoria Histórica en Andalucía y que esperemos que, ya que se están haciendo algunas cosas bien, pues, se escuchen y se

atiendan estas reivindicaciones, porque el texto puede ser un buen texto si, de alguna forma, se modificaran esos aspectos a los que acabo de referirme.

Y termino. Este tipo de debates... Las políticas que ustedes desarrollan desde el Gobierno, realmente, las políticas que nosotros estamos también desarrollando en aquellos gobiernos locales donde tenemos participación o aquellos gobiernos autonómicos donde participamos, se suelen descalificar, en muchas ocasiones, como ánimos o ganas de revancha o de abrir heridas que ya estaban cerradas. Yo quiero decir sobre esto una cosa. Simplemente, citar a Juan Gelman, cuando hace dos años recibió el Premio Cervantes. Y él decía que están muy equivocados, las heridas no están aún cerradas, porque su único tratamiento, el único bálsamo que tienen esas heridas es la verdad y, luego, la justicia, y solo así es posible el olvido verdadero.

Y también, sobre todo, quiero terminar haciendo un homenaje a todos aquellos y aquellas —especialmente, a los más jóvenes— que están dignificando a la democracia en este país desde hace muchos años, inmiscuyéndose, día a día, voluntariamente, sean en las organizaciones que sean, en los trabajos de recuperación de la Memoria histórica, y dando la razón a aquello que, en su momento, dijo el dibujante gallego Castelao en 1936, cuando se empezó a asesinar a personas inocentes, simplemente, por lo que pensaban. Decía Castelao entonces —y yo creo que el tiempo le está dando la razón— que lo que se enterraban no eran huesos sino semillas. Y esas semillas están germinando, y van a seguir germinando. Y las administraciones y su gobierno tienen que estar a la altura de las circunstancias.

Gracias.

La señora COVES BOTELLA, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Muchas gracias, señor Mariscal Cifuentes.

Para cerrar el debate, tiene de nuevo la palabra, en nombre del Consejo de Gobierno, la Consejera de Justicia y Administración Pública.

Señora Consejera, su señoría tiene la palabra.

La señora ÁLVAREZ CIVANTOS, CONSEJERA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

—Gracias, Presidenta. Señorías.

En Andalucía, tenemos algo más, en la Comunidad Autónoma, algo más que un plan estratégico. No hemos hablado de plan estratégico, porque nos hemos dotado de un conjunto de herramientas que no tiene ninguna Administración, que no tiene ninguna comunidad autónoma.

La primera de ellas es el Comisariado para la Memoria Histórica, un órgano adscrito a la Consejería de Justicia, que coordina e integra todas las políticas que lleva a cabo la Junta de Andalucía para el reconocimiento social de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Su decreto fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 30 de junio.

Nos hemos dotado de un instrumento más: el Protocolo Andaluz de Actuaciones en Exhumaciones de Víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra, orden que se publicó en el *Boletín de la Junta de Andalucía* con fecha 28 de septiembre, por la cual se regula el procedimiento de exhumación y el protocolo por el que deben regirse las exhumaciones. Tras este protocolo, se constituyó un comité técnico, por el que usted me preguntaba, que ya se ha reunido en una primera actuación.

Le voy a decir, el Protocolo de Exhumaciones es un protocolo que quiere dotar de un procedimiento y de rigor científico a las actuaciones. No tiene nada que ver, en absoluto, con la actividad jurisdiccional que, en su caso, lo que busca —como todos sabemos— son delitos y culpables. La Junta de Andalucía, una comunidad autónoma, no busca delitos ni busca culpables, lo que hace es desarrollar procedimientos administrativos y hacer lo que la Ley de la Memoria Histórica le pide, que es colaborar en la localización de los familiares de víctimas de la Guerra Civil y de la posguerra.

Además, el Gobierno andaluz cuenta con una herramienta más, la más poderosa: una política de Memoria histórica firme y decidida, responsable para con nuestras obligaciones y consciente de lo que debe ser y no debe ser la política de Memoria histórica. Una política de Memoria histórica no puede ser revanchismo, no puede ser abrir heridas y no puede convertirse en un mercadeo. La política de Memoria histórica debe ser, por el contrario, una política que cuente lo que pasó, para que no vuelva a pasar, para que no se repita.

Señorías, hay razones de peso para recuperar la memoria de la Historia, razones de humanidad, razones de respeto a las víctimas, de consuelo a las familias y, por supuesto, de sentido de la justicia.

El proyecto Todos los Nombres es un proyecto —como he dicho— que nos gusta, con el que vamos a colaborar, vamos a continuar la colaboración y ahora, en este momento, estamos viendo la fórmula de esa colaboración, si será un convenio o será una subvención. Es un proyecto importante, no solamente para Andalucía sino para el conjunto de España en materia de Memoria histórica.

Cuando habla de escasez de las subvenciones, ahí sí me sorprende, señoría, porque en la Comisión de Justicia donde hablamos de los presupuestos de la Consejería, su grupo no participó, no asistió a la Comisión en la que se debatieron los presupuestos de la Consejería de Justicia y Administración Pública. Por lo tanto, no tuvimos la ocasión de discutir la cuantía de las subvenciones. En cualquier caso, le diré que

me entristece que ustedes puedan entender, en algún momento, la política de Memoria histórica como una política que se pueda cuantificar económicamente. Es una política que no tiene nada que ver con la cuantificación económica y me sorprende que así lo entienda su grupo.

En cuanto a la referencia que ha hecho a Blas Infante, nos alegramos de que haya una coincidencia nacionalista en su petición con las peticiones que, en su día, hizo el Partido Andalucista. Y, bueno, el año que viene sabe que se ha declarado por el Consejo de Gobierno el año del 125 aniversario del nacimiento de Blas Infante.

Usted habla de una resolución que nos exige tramitar la anulación de la sentencia a Blas Infante. Ya, en varias ocasiones, se ha aclarado este asunto, la resolución es anterior a la Ley de Memoria Histórica. Usted sabe que la Ley no incluye términos jurídicos como «nulidad» o «anulación» en delitos cometidos de forma sistemática por un Estado. La Ley, en su artículo, habla de «declaración de ilegitimidad». Lo leo textualmente: «Se declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones».

El Presidente de la Junta de Andalucía tuvo ya, este verano, la oportunidad de pronunciarse al efecto. Dijo que Blas Infante fue asesinado, no fue sentenciado. «El peor infierno es la venganza inútil», dijo, parafraseando a la hija de Blas Infante.

Como ha sostenido el filósofo investigador Reyes Mata, no debemos ahogar el significado político de los desaparecidos en el fatalismo histórico. Manuel Azaña lo expresó también en plena Guerra Civil, el eco de sus palabras sigue vigente hoy: «Escuchen la lección de los muertos que ahora, abrigados por la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor».

La sociedad andaluza afronta su pasado con responsabilidad y sentido de la justicia, cerrando heridas, reconociéndonos en un Estado de derecho en el que hoy caben, afortunadamente, todas las opiniones y todas las sensibilidades.

Señorías, en Andalucía estamos haciendo una política de Memoria histórica de encuentro, de unión, de cerrar heridas, no de abrirlas, pero sin olvidarnos de que el presente, de que el nuevo orden constitucional, no puede descansar en el olvido del significado de aquella violencia, porque estaríamos expuestos a la repetición. Y, si injusta fue la guerra, la memoria y el olvido no tienen cabida en la misma frase. Por ello pretendemos construir una identidad presente y aprender de los errores, para no volver a cometerlos.

El 15 de mayo de 2009, en mi primera intervención en esta Cámara, se lo decía a su grupo: la Memoria histórica no va a parar, no se va a parar, primero, porque la reparación moral es algo que ya es de todos, es de toda la sociedad, y, segundo, porque el Gobierno andaluz no va a permitir, de nuevo, el olvido de la injusticia. La Junta de Andalucía va a seguir liderando la política de Memoria histórica, y lo haremos con el equilibrio que propone la Ley de Memoria Histórica, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, lo haremos acompañando a los familiares de las víctimas, siempre con el corazón en una mano y con la ley en otra.

Muchas gracias.

[Aplausos.]

La señora COVES BOTELLA, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

—Muchas gracias, señora Consejera de Justicia y Administración Pública.

Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve y media, que comenzaremos con la moción.